



NUESTRA AMÉRICA



Elementos para la comprensión del momento político en Nuestra América

49

JAIRO ESTRADA ÁLVAREZ

PROFESOR DEL DEPARTAMENTO CIENCIA POLÍTICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

En el último período ha ganado espacio la tesis de que estamos asistiendo al fin de lo que se ha definido como el *ciclo progresista*. Más que ello, como se trata de mostrar en este texto, lo que se ha puesto en evidencia es la acentuación de la disputa por el destino de Nuestra América, así como los límites del “posneoliberalismo”.

El deterioro de la macroeconomía y el “modelo extractivista”

Los efectos macroeconómicos generados por la caída de los precios de los *commodities* y, de manera particular, del petróleo, en el contexto de la persistente crisis del capitalismo mundial, son evidentes. En la mayoría de los países de la región se ha acentuado en forma diferenciada la tendencia a los desbalances externos, en las balanzas comerciales y de pagos, lo cual ha generado mayores déficits fiscales, estimulado el creciente endeudamiento y presionado la inflación al aumento. Tras el

En el último período ha ganado espacio la tesis de que estamos asistiendo al fin de lo que se ha definido como el ciclo progresista. Más que ello, como se trata de mostrar en este texto, lo que se ha puesto en evidencia es la acentuación de la disputa por el destino de Nuestra América, así como los límites del “posneoliberalismo”

deterioro de los indicadores macroeconómicos se encuentra el régimen extractivista de acumulación que se impuso en la región en los últimos lustros, con independencia de los proyectos políticos, pudiéndose en todo caso establecer claras distinciones entre los gobiernos de la derecha neoliberal y algunos de los gobiernos progresistas (especialmente en Venezuela, Ecuador y Bolivia). Mientras que en los primeros la mayor porción del excedente económico fue a parar a las manos de las corporaciones transnacionales y la destinación para la financiación del gasto público fue menor, en los segundos, merced a políticas públicas en defensa de la riqueza natural y reivindicativas de la soberanía nacional, se emprendió su redistribución para favorecer proyectos de inversión pública y sustentar un sinnúmero de programas sociales orientados hacia la población más pobre.

La estructuración del “modelo económico” con base en economías de extracción genera impactos distintos sobre los proyectos políticos. Mientras que en los países donde gobierna la derecha neoliberal representa una profundización del proceso de transnacionalización y desnacionalización (destruktiva) de la economía, en el caso de los gobiernos progresistas sus consecuencias son evidentemente contradictorias. En efecto, por una parte, es indiscutible que tales economías constituyen en gran medida el soporte de las pretendidas políticas de transformación social, pero, por otra, se han convertido al mismo tiempo en el sustento de nuevas conflictividades que han erosionado su legitimidad social.

Por ello puede hablarse de la existencia de formas de oposición política y social dentro del propio campo popular, que se enfrentan a la orientación asumida por el modelo económico. Tal oposición posee configuraciones territoriales, en las que sobre todo comunidades indígenas o campesinas encaran, con muy diversos repertorios de lucha, proyectos de extracción minero-energética. Las razones para ello se encuentran en una crítica radical al modo de desarrollo, al modo de vida concomitante con



éste y a los severos impactos socioambientales. Estas luchas en algunos casos han pretendido ser instrumentalizadas por la derecha con el propósito de ampliar el espectro de oposición a los gobiernos progresistas. Éstos, por su parte, en lugar de decantar el debate público y discutir las demandas sociales han optado por acciones represivas, que terminan debilitando las propias bases sociales. Tampoco resulta apropiado, en la perspectiva de consolidar una correlación de fuerzas a favor del campo popular, el extremismo (especialmente ambiental) de algunas demandas sociales.

El dilema consistente en usar el excedente generado por las extracción de recursos naturales para financiar el proyecto político gobernante, por un lado, o producir un quiebre en el modo de producción y de vida en defensa de la madre tierra, en las condiciones de un solo país, por el otro, atraviesa buena parte del debate teórico y político. Éste adquiere significados más complejos cuando de por medio está la pregunta acerca de los fundamentos económicos del proyecto político. En ese dilema se divide el campo popular. Y no hay hasta ahora elaboraciones que posibiliten al menos coincidencias estables.

"Antineoliberalismo" y "verdadero capitalismo"

Tras los debates sobre el "modelo de desarrollo" hay aspectos todavía más hondos de alcance sistémico. En efecto, pese a que algunos gobiernos se autodefinieron como del "socialismo del siglo XXI" (Bolivia, Ecuador, Venezuela), entre tanto no pueden caracterizarse con ese concepto, lo cual no le resta valor político alguno a los importantes cambios que allí se han adelantado, especialmente en lo concerniente a la reafirmación de la autodeterminación y la soberanía, a la recuperación de los recursos naturales y la puesta en marcha de políticas sociales a favor de los humildes. Esos atributos nacional-populares no necesariamente indican que se esté en camino de la superación de rasgos esenciales de la organización capitalista.

Más evidente han sido en algunas de las experiencias los contenidos antineoliberales, aunque sin desprenderse de los enfoques predominantes de política macroeconómica. En atención a ello, surgieron conceptualizaciones imprecisas para definir el carácter de (algunos) gobiernos progresistas, como la del "posneoliberalismo". En otros casos, como los de Argentina, Uruguay y Brasil,

En la mayoría de los países de la región se ha acentuado en forma diferenciada la tendencia a los desbalances externos, en las balanzas comerciales y de pagos, lo cual ha generado mayores déficits fiscales, estimulado el creciente endeudamiento y presionado la inflación al aumento. Tras el deterioro de los indicadores macroeconómicos se encuentra el régimen extractivista de acumulación que se impuso en la región en los últimos lustros.

políticas y medidas que pueden catalogarse como progresistas, se acompañaron de una reivindicación del “verdadero capitalismo”, entendiendo por éste el capitalismo de la producción, en oposición al capitalismo financiero o de la especulación. En algunas experiencias, la idea del socialismo ha sido más bien un asunto del discurso y la retórica, lo cual desde el punto de vista cultural no deja de ser significativo. Y en otros, el ideal del socialismo ni siquiera ha hecho parte del proyecto (ni del discurso) político.

El papel de la cuestión social

Particular atención ha merecido la forma como se ha enfrentado la solución de la cuestión social. Diferentes análisis constatan que a más tardar hasta 2014 se produjo un mejoramiento de la situación social en Nuestra América, medida en la reducción de los índices de pobreza y de miseria y en el crecimiento de las capas medias de la población. Tal resultado se explica por el redireccionamiento de recursos de presupuesto hacia el gasto social, incluso en los países en los que ha gobernado la derecha neoliberal. Es indiscutible que ha sido en los países con gobiernos progresistas, en donde se han registrado los mayores aumentos del gasto social, especialmente en los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, aunque también en Brasil, Argentina y Uruguay. No obstante, las políticas orientadas a reducir la pobreza, no necesariamente se han acompañado de una reducción del patrón de desigualdad social existente. Solamente en Venezuela se comprueba una reducción significativa de la desigualdad hasta 2014; en menor medida en Bolivia y Ecuador. En el conjunto de países de la región, la disminución del coeficiente Gini ha sido moderada.

Más allá de los indicadores de medición, la cuestión social contiene aspectos más sustanciales, referidos a sus alcances estructurales y a la capacidad de financiación. En este punto, en lo que corresponde a los

gobiernos progresistas se ha señalado con razón el predominio de un enfoque asistencialista, sin mayor diferencia respecto de los enfoques que ha estimulado la derecha neoliberal. Si bien la experiencia enseña que con ese enfoque se pueden enfrentar problemas acuciantes en el corto plazo -e, incluso, construir lealtades sociales-, en sentido estricto, más que abocarse una solución estructural de la cuestión social se la está regulando y reproduciendo. Los respaldos se deterioran cuando ocurre lo mismo con las condiciones de financiación y, sobre todo, cuando éstas dependen de los comportamientos de la macroeconomía.

En ese sentido, la pregunta por la transformación estructural de la relación social capitalista adquiere relevancia, pues sobre ella descansa la posibilidad real de producir sociedades menos desiguales en el largo plazo. Los procesos de estatización que se han advertido en las experiencias nacional-populares, aunque afectan la propiedad transnacional, no necesariamente conducen a una afectación de la propiedad capitalista en general, particularmente en lo que respecta a las fuerzas internas, y tampoco son garantía de que se encuentren en curso procesos de socialización de la propiedad que se orienten hacia la generación de nuevas relaciones sociales "desde abajo". Evidentemente provocan reacomodos y nuevas alianzas de clase y debilitan los poderes establecidos históricamente; pueden, inclusive, generar el surgimiento y el fortalecimiento de nuevas facciones, progresistas o modernizantes a la luz del proceso histórico, pero no comprometidas con los cambios estructurales de fondo en dirección hacia sociedades que puedan catalogarse como poscapitalistas u orientadas al socialismo. Las experiencias de los gobiernos progresistas denotan en ese aspecto que se trata de construcciones sociales relativamente inestables y con alta posibilidad de reversión de sus avances.

El ámbito político y sociocultural

Junto con lo anterior, se encuentra el ámbito político y sociocultural, determinado por las trayectorias específicas de los procesos que posibilitaron el acceso a posiciones de gobierno, en lo cual incidieron los liderazgos de Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa. Allí donde el acceso al gobierno se fundamentó en diversas expresiones organizadas del movimiento social y copiosas movilizaciones populares que se sellaron con triunfos electorales, los logros democratizadores han sido mayores que en los casos en los que predominaron las alianzas electorales y la "democracia de opinión".

En ese sentido, debe destacarse el inmenso valor político y cultural de los procesos constituyentes que se adelantaron en Venezuela, Bolivia y Ecuador, en cuanto contribuyeron a producir e institucionalizar cambios importantes en las relaciones de poder a favor de las clases subalternas y a propiciar procesos de democratización política y social. Sin lograr, en todo caso, una ruptura plena con la organización democrático-liberal, la cual ha impuesto que, a causa de los diseños que le son inherentes, los proyectos políticos se hayan visto abocados a una recurrente (y desgastante) convalidación electoral. Dicha convalidación ha hecho del resultado electoral un fin más que un medio, afectando el sentido transformador del proyecto político y acompañándose de tendencias hacia el debilitamiento del movimiento social y popular, que incluyen, en algunos casos, la cooptación y el disciplinamiento, o la pérdida de su potencial crítico y transformador. Aunque ello también deviene en factor explicativo de formas de oposición dentro del propio campo popular.

Más problemática ha sido, por otra parte, la situación de los proyectos progresistas que se han sustentado en alianzas electorales, pues la necesidad de preservación de mayorías terminó imponiendo el pragmatismo para garantizar la obtención de resultados favorables. La consecuencia lógica ha sido el alejamiento del

La pregunta por la transformación estructural de la relación social capitalista adquiere relevancia, pues sobre ella descansa la posibilidad real de producir sociedades menos desiguales en el largo plazo. Los procesos de estatización que se han advertido en las experiencias nacional-populares, aunque afectan la propiedad trasnacional, no necesariamente conducen a una afectación de la propiedad capitalista en general, particularmente en lo que respecta a las fuerzas internas, y tampoco son garantía de que se encuentren en curso procesos de socialización de la propiedad que se orienten hacia la generación de nuevas relaciones sociales “desde abajo”.

programa político de las aspiraciones populares y la concesión a fuerzas de derecha. Los casos del Partido de los Trabajadores de Brasil y del Frente Amplio en Uruguay son ejemplos de ello.

Con independencia de lo señalado, el actual balance de poder registra un mayor protagonismo del movimiento social y popular en el debate y en la definición de los asuntos públicos. El cambio político ha implicado un traslado de poder social a las clases subalternas y una mayor politización.

Los cambios en la estrategia de la derecha

En este contexto general, el comportamiento general de las fuerzas de la derecha ha tenido significativas variaciones. De una etapa inicial, luego de los primeros cambios progresistas, en la que primó una posición defensiva y de reducción de su poder, se ha transitado particularmente durante el último lustro a una estrategia ofensiva de disputa por el poder político, en presencia de la preservación de un poderío económico interior articulado con dinámicas transnacionales y no afectado sustancialmente por las políticas progresistas. Dicha estrategia, además de desenvolverse en el marco de las contiendas electorales y del uso de las posibilidades que brinda la organización institucional del poder y de la persistente democracia gobernable (para propiciar, por ejemplo, los llamados golpes blandos), ha desplegado nuevos repertorios que conjugan la movilización en la calle con una intensa acción comunicativa a través de las llamadas redes sociales y de los medios masivos de comunicación. La magnificación de los problemas, la distorsión e, incluso, el falseamiento de la realidad se han constituido en factor generador de dividendos políticos a su favor. Asimismo, se asistido a una actualización del discurso político neoconservador, que se apropia de reivindicaciones de la izquierda y logra apoyos sociales tanto en sectores medios como en segmentos importantes de la población en condiciones de pobreza.



La acción coordinada de los Estados Unidos con la derecha regional, unida a los otros factores ya expuestos, ha dado sus frutos. Se han recuperado posiciones perdidas y está en curso la afectación de otros procesos. La derecha está a la ofensiva en Nuestra América. El “golpe blando” en Brasil y la creciente amenaza de intervencionismo en Venezuela son sus más recientes manifestaciones.

Tras sus derrotas transitorias, en el resurgimiento de las fuerzas de derecha han influido los errores de conducción política de los procesos de cambio, los problemas de gestión pública, la tendencia a la burocratización y la corrupción, así como los conflictos en el campo popular, que han sido capitalizados hábilmente, dado el descontento social que todo ello ocasiona.

Los aspectos geopolíticos y la situación de la integración

Lo hasta aquí expuesto, comprende principalmente las dinámicas internas de los procesos políticos. A ellas se agregan factores de carácter geopolítico. En este aspecto, deben considerarse por una parte las relaciones de Estados Unidos con América Latina y el Caribe y, por la otra, los procesos de integración que se han adelantado recientemente en la región. En el primer caso, puede afirmarse que con los gobiernos progresistas se asistió a una pérdida de influencia de los Estados Unidos, afectándose su posición hegemónica y su política de “patio trasero”. Con el liderazgo de Hugo Chávez se produjo el retorno del discurso y la política antiimperialista, dándole continuidad a la coherencia (y persistencia) de la Revolución cubana. Algunos gobiernos progresistas se inscribieron dentro de esos lineamientos, como Bolivia y en menor medida Ecuador; otros optaron por el pragmatismo y la moderación extrema, como en los casos de Brasil y Uruguay. De manera contradictoria, al tiempo que un grupo de países reivindicó la ruptura y el restablecimiento de la soberanía y la autodeterminación, otros dieron continuidad a relacionamientos que restablecieron por otras vías los lineamientos de las políticas neoliberales del “libre comercio”. Igualmente se buscó una ampliación del espectro de las relaciones exteriores, particularmente con China y Rusia. Sobre todo China incrementó en forma significativa su presencia económica en la región. Brasil, a su vez, amplió su influencia regional, sin que ello representase un estímulo



a los procesos de integración: su influencia se articula más bien con los intereses económicos de sus transnacionales.

La atenuación de la posición hegemónica de Estados Unidos no significó el abandono de las posiciones perdidas y mucho menos la renuncia a su estrategia de dominación de espectro completo, que junto con la prolongación de las políticas de militarización con fines de control del acceso a recursos naturales, contiene elementos políticos, tecnológicos y socioculturales. En ese sentido, además del apoyo irrestricto a los "países aliados" que conforman el arco del Pacífico, se impidieron propósitos de cambio político con los "golpes blandos" en Honduras y Paraguay, y se ha buscado la desestabilización de los gobiernos progresistas. Para ello, se ha contado con evidentes articulaciones y coordinaciones con las fuerzas de derecha de los países de la región, haciendo aparecer las presiones para el cambio político regresivo como procesos con desencadenamientos internos y no necesariamente como el producto de constelaciones de fuerzas transnacionales, con indiscutible sujeción a los intereses estadounidenses.

La acción coordinada de los Estados Unidos con la derecha regional, unida a los otros factores ya expuestos, ha dado sus frutos. Se han recuperado posiciones perdidas y está en curso la afectación de otros procesos. La derecha está a la ofensiva en Nuestra América. El "golpe blando" en Brasil y la creciente amenaza de intervencionismo en Venezuela son sus más recientes manifestaciones.

En cuanto se refiere a los procesos de integración, éstos también están afectados por la pérdida de influencia del progresismo. Ade-

más de los cambios políticos regresivos por el retorno de la derecha a posiciones de gobierno, que es útil para fortalecer la integración neoliberal contenida en la Alianza del Pacífico, debe señalarse que no fue posible consolidar el proyecto de integración alternativo promovido bajo el liderazgo de Hugo Chávez con la iniciativa del ALBA-TCP. Esta iniciativa, concebida sobre presupuestos de cooperación y solidaridad que trascendían el cálculo económico, no logró el consenso del amplio espectro (político-ideológico) de los gobiernos progresistas. Los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay decidieron no participar en ese proceso integrador, manteniendo más bien su adscripción al Mercosur. El balance actual es notorio. Ni se proyectó el ALBA, cuya situación se ha visto afectada por la caída de los precios de los *commodities* y los problemas internos de algunos países, ni el Mercosur superó el estancamiento que lo acompaña desde hace varios años.

Otros esfuerzos políticos orientados a promover un accionar colectivo y autónomo de los países de la región, como, por ejemplo, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), han perdido peso luego de los impulsos iniciales y de un notorio protagonismo. Entre tanto, en estos casos, los propósitos integradores tienden a ser más retóricos que reales. La derecha no tiene interés en ellos, pues su perspectiva política es panamericana, ajustada al sometimiento a los Estados Unidos.

Estamos frente a un campo político abierto y en disputa, sin una precisa definición de su posible trayectoria futura.